

Santiago, dos de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Por sentencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT S-9-2022, se rechazó la denuncia de despido antisindical y se acogió la demanda subsidiaria de despido injustificado, condenando a la demandada Consorcio Acciona Ossa Pizzarotti CC110 SpA. al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y feriado proporcional. Además, declaró la responsabilidad subsidiaria de Codelco Chile y se rechazó la demanda reconvencional deducida por la demandada principal.

Contra ese fallo, recurrieron de nulidad la parte demandante y la parte demandada principal de Consorcio Acciona Ossa Pizzarotti CC110 SpA.

La parte denunciante, funda su recurso en dos causales que deduce de modo subsidiario. En primer lugar, deduce la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, es decir, infracción a las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba. En subsidio, deduce la causal del artículo 477, por infracción de ley, denunciando infringidos los artículos 289 y 174 en relación al 221, todos del Código Laboral.

Solicita que se acoja el recurso de nulidad, se invalide la sentencia y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que acceda a la demanda.

A su vez, la parte demandada principal, funda su recurso en 2 causales que deduce de modo subsidiario. En primer lugar, deduce la causal del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en dos hipótesis: a) en cuanto la sentencia se extiende a puntos no sometidos a decisión del tribunal, y; b) en relación al artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, es decir, la falta en la sentencia del análisis de toda la prueba rendida.

En subsidio, deduce la causal del artículo 478 letra c) del Código, es decir, cuando sea necesario alterar la calificación jurídica de los hechos asentados por el tribunal de base sin modificar estos.

Solicita que se anule la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que acoja la demanda reconvencional interpuesta.



Declarados admisibles los recursos, se procedió a su conocimiento en la audiencia del día 13 de septiembre último, oportunidad en que alegaron los abogados de todas las partes.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de la parte demandante:

Primero: Que la primera causal invocada es la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, es decir, infracción a las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba, ello por cuanto al afirmar en el considerando vigésimo que el denunciante fue elegido Presidente de un “sindicato del día después” se habría infringido el principio de identidad de la lógica formal.

Luego de reseñar jurisprudencia relativa al principio de identidad, señala que la sentencia infringe lo prescrito en el artículo 456 del Código Laboral pues no puede haber una premisa sin una conclusión, al no expresar el fallo razones jurídicas, científicas, técnicas ni de experiencia al descartar la prueba de solicitud de ministro de fe para constituir el sindicato de inicios del mes de octubre de 2021, antes de la carta de despido. Esta prueba acredita los días de votación y la centralización de información en la Inspección Provincial del Trabajo de Quillota, proceso que se vio frustrado. En consecuencia, la afirmación de que nos encontramos ante un sindicato del día después no tiene sustento.

Segundo: Que de un modo persistente y reiterado se ha venido indicando por esta Corte que la causal del artículo 478 b) busca controlar el razonamiento probatorio contenido en la sentencia, con miras a verificar que en esa actividad no se hayan contrariado o vulnerado los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia. Expresado en otros términos, de lo que se trata es de fiscalizar que las razones vertidas por el juzgador respeten esos lineamientos. Para ese fin, el recurrente ha de ser capaz de demostrar el error, precisando en su impugnación cuáles hechos estarían incorrectamente fijados en el fallo y, sobre todo, la causa de ese error.

Tercero: Que de la lectura del recurso se advierte que no se desarrollaron cuáles serían las máximas de la experiencia que estima infringidas en la valoración de la prueba por la sentenciadora, o cuál es



el hecho erróneamente asentando o de qué forma se infringiría alguna regla de la sana crítica, sino que, simplemente hace alusión al principio de identidad, de forma más bien genérica, refiriendo al respecto que: *“Queda de manifiesto que la jueza da por sentado que el sindicato del cual el actor fue electo presidente, es un “Sindicato del día después”, infringiendo con ello el principio de identidad de la lógica formal”*. Sin embargo, aquellas consideraciones generales no permiten darle contenido en cuanto a de qué forma el razonamiento asentado en la sentencia infringiría alguna regla de la sana crítica, en particular el principio de identidad, pues como se ha sostenido reiteradamente, la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo tiene como finalidad primordial propiciar un control sobre el juicio de hecho contenido en la sentencia. Por ende, la revisión que debe efectuarse se circunscribe a la verificación de la existencia de una infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, lo que debe ser explicitado y desarrollado en el recurso, lo que no ocurre en este caso.

Cuarto: Que en efecto, lo que más bien se aprecia en realidad no es un reproche de los razonamientos que llevaron a la jueza a desechar la pretensión del actor al rechazar la demanda de despido antisindical, sino que, por el contrario, sus argumentaciones se sustentan en una supuesta ausencia de análisis de la prueba rendida, indicando en varios pasajes del recurso que el tribunal no expresa las razones jurídicas, científicas, técnicas ni de experiencia para descartar la prueba documental, probanzas que a su juicio dieron cuenta que efectivamente existió una primera solicitud de constitución de sindicato a inicios de octubre de 2021, antes de la comunicación de su despido que fue el 17 de octubre de ese año.

Es decir el reproche se sustenta en que la jueza no se hizo cargo, de forma completa, razonada y suficiente, de valorar todos los medios probatorios rendidos, es decir, lo que en definitiva alega el recurrente implica la ausencia de fundamentación, lo que importa una causal ajena a la interpuesta, como es la prevista en el artículo 478 letra e), del Código del Trabajo, que en su primera parte consagra el vicio de falta de los requisitos que debe tener un fallo, en relación al artículo 459 N° 4



del mismo texto legal, norma que contiene las exigencias formales de una sentencia definitiva, entre ellas, el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa estimación, por lo que al haber invocado una causal que supone que las razones inexistentes son a la vez erradas o *malas*, la fundamentación resulta contradictoria, lo que implica que este recurso no puede prosperar.

Quinto: Que, además, cabe tener en consideración que la sentenciadora, analizando la prueba rendida, en el motivo vigésimo, razonó fundadamente señalando –en lo que interesa al recurso- que: *“en el caso de marras, debido a que la empresa no tenía conocimiento al momento del despido de la calidad de aforado del trabajador, lo que resulta lógico pues aún no se constituía el Sindicato que le daba tal calidad, esta sentenciadora estima que el solo hecho del despido del actor no constituye una práctica antisindical, ya que no se advierte el ánimo vulneratorio de la libertad o la acción sindical, al existir al momento del despido desconocimiento de dicha calidad. Así, ante tal desconocimiento, aparece que malamente se puede afectar la acción o la libertad sindical por parte de la empresa, por lo que esta juez desestimaré la acción por práctica antisindical (...) Que, a mayor abundamiento conforme la prueba ya analizada, relativa a que la constitución del Sindicato y su elección tiene como origen el dejar sin efecto el despido del que había sido comunicado, esta juez no puede dejar de señalar que en autos nos encontramos con lo que doctrinariamente se ha llamado; “sindicato del día después”, es decir, un trabajador que tomando conocimiento del término de su relación laboral con el empleador, en este caso, por necesidades de la empresa, decide constituir un sindicato, con el solo objeto de beneficiarse del fuero que se establece para quienes concurran a su formación (...)”*

En consecuencia, no se vislumbran hechos erróneamente establecidos por el tribunal a quo o que el razonamiento alcanzado vulnere lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, por lo que los reproches que alega el recurrente no se perciben. Es más, la prueba que el recurrente estima omitida fue analizada expresamente por la sentenciadora en el motivo vigésimo primero, dando razones para



desestimarla, indicando que: *“Que en nada modifica lo antes resuelto, todos los documentos referidos a los intentos previos de constitución de Sindicato, por cuanto, no existe indicio alguno que la demandada hubiere tenido algún conocimiento de ellos, máxime si tampoco tienen validez para constituir un fuero”*.

Por todo lo antes dicho, el presente recurso no puede ser acogido. En efecto, lo que más bien se aprecia en realidad, es la disconformidad del recurrente con lo resuelto en la sentencia.

Sexto: Que como causal subsidiaria, deduce la del artículo 477 del Código Laboral, en su hipótesis de infracción de ley, denunciando infringido dos grupos de normas: a) el artículo 289 del mismo Código; y b) el artículo 174 en relación al 221 ambos del Código Laboral.

Expone que el artículo 289 del Código del Trabajo se infringe en el fallo al exigir el requisito de intencionalidad para que se configure una práctica antisindical y esta exigencia de un elemento subjetivo contraviene el texto expreso de la norma, y lo que al respecto ha determinado la jurisprudencia, que ha descartado que deba acreditarse este elemento volitivo.

Agrega que la Ley N° 20.940 fortaleció la regulación en materias de prácticas antisindicales y reemplazó los elementos subjetivos de la conducta, lo que se demuestra en la redacción actual de los artículos 289, 290, 403 y 404 todos del Código del Trabajo. Así, como señala también la doctrina que cita, el legislador ha dado carácter objetivo a los atentados contra la libertad sindical, priorizando la tutela de la acción y el resultado lesivo, por sobre la exigencia de intencionalidad o ánimo deliberado de daño.

Aduce en cuanto a la vulneración del artículo 174 en relación al 221 ambos del Código del Trabajo, que se infringieron pues a pesar de haberse acreditado que el trabajador gozaba de fuero al momento de su despido, se rechazó la acción de nulidad del despido, y en consecuencia se rechazó la reincorporación del denunciante, tal como dan cuenta los considerandos décimo octavo y décimo noveno del fallo.

Séptimo: Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente



aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se ha tenido por probados.

Octavo: Que son hechos de la causa que la comunicación del despido del actor fue el 17 de octubre de 2021, a contar del 28 del mismo mes y año, el que cumplió con las formalidades legales; que el 29 de octubre de 2021, el demandante fue elegido presidente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores de la Minería y otros, lo que comunicó a la empresa demandada el 1 de noviembre de 2021, tal como se lee en los motivos décimo cuarto y décimo sexto.

Luego, la jueza estableció que habiendo sido elegido presidente del sindicato el 29 de noviembre de 2021 y conforme a lo dispuesto por el artículo 221 del Código Laboral, desde el 19 de octubre de 2021 el trabajador gozaba de fuero.

A los hechos asentados en el fallo, la jueza los confrontó con los artículos 289 y 291 del Código del ramo, concluyendo que si bien el empleador despidió a un trabajador aforado sin contar con la autorización judicial, no incurrió en un despido antisindical, para lo cual estableció que: *“al momento del despido, la empresa carecía de toda la información, puesto que al despedir al actor, ésta no solo no contaba con la información de que se constituiría un sindicato del que el trabajador era miembro, de su elección como presidente y que además, contaba con fuero laboral. Es menester indicar que al despedir al actor, la constitución del Sindicato, no solo aún no se llevaba a cabo sino que la misma surge con el propósito de que el despido quedara sin efecto, como ha quedado demostrado, según ya se señaló pues el demandante ya estaba en pleno conocimiento acerca de su despido, lo que ocurrió el 17 de octubre de 2021”*.

Luego, sobre la base de los hechos probados, la jueza se hizo cargo de la acción interpuesta, la que se fundó en el despido del actor quien gozaba de fuero, concluyendo, conforme a los artículos 289 y 291 del Código del ramo, que no existió práctica antisindical. En efecto, la sentencia estableció que: *“Del tenor de las normas antes referidas, aparece que la legislación laboral sanciona como prácticas*



antisindicales acciones dirigidas a afectar la libertad sindical, o la acción sindical, y en el caso de marras, debido a que la empresa no tenía conocimiento al momento del despido de la calidad de aforado del trabajador, lo que resulta lógico pues aún no se constituía el Sindicato que le daba tal calidad, esta sentenciadora estima que el solo hecho del despido del actor no constituye una práctica antisindical, ya que no se advierte el ánimo vulneratorio de la libertad o la acción sindical, al existir al momento del despido desconocimiento de dicha calidad. Así, ante tal desconocimiento, aparece que malamente se puede afectar la acción o la libertad sindical por parte de la empresa, por lo que esta juez desestimaré la acción por práctica antisindical, por las razones antes referidas”.

De la lectura de la sentencia no se advierten los reproches que realiza el recurrente respecto de la errónea interpretación del artículo 289, es más, la jueza no exige intencionalidad en el actuar del empleador, sino que, por el contrario establece que éste, al momento de despedir al actor, no tenía conocimiento de que éste gozaba de fuero, considerando para tales efectos los hechos acreditados –carta de despido el 17 de octubre de 2021, a contar del 28 del mismo mes y año; elección del actor, el 29 de octubre de 2021 y comunicación a la empresa, el 1 de noviembre del mismo año-.

Es decir, al desestimar la concurrencia de la letra a) del artículo 289 del Código del Trabajo –que se precisa en el recurso- no se interpretó la norma erróneamente, desde que, dicha hipótesis se refiere a la obstaculización de la formación o funcionamiento de sindicatos de trabajadores negándose injustificadamente a recibir a sus dirigentes, ejerciendo presiones mediante amenazas de pérdida del empleo o de beneficios, o del cierre de la empresa, establecimiento o faena, en caso de acordarse la constitución de un sindicato; ejecutar maliciosamente actos tendientes a alterar el quórum de un sindicato o despedir a trabajadores por haber manifestado su intención de sindicalizarse.

En efecto, en este caso, conforme a los hechos acreditados se estableció por la jueza que el empleador no solo no tenía conocimiento de la calidad de aforado del trabajador al momento del despido, sino que, además, que la constitución del Sindicato y su elección tuvieron



como origen el dejar sin efecto el despido del que había sido comunicado. Por consiguiente, conforme a los hechos inamovibles para esta Corte, se estableció que no existió práctica sindical sino que, además, el fuero del que goza el actor le es inoponible a la demandada, y por tanto en nada altera la decisión de término de los servicios, pues este no existía al momento de la fecha de término.

Noveno: Que seguidamente, en la sentencia recurrida se les ha dado a las normas indicadas, el sentido y alcance perseguido por la ley. En efecto, conforme a los hechos probados en el fallo claramente se puede establecer, tal como lo hizo la jueza, que más allá de la apariencia del fuero que formalmente detenta el actor, lo cierto es que la prueba le permitió acreditar que la constitución del sindicato al que accedió tuvo por finalidad el proveerse de una inamovilidad para evitar el despido, considerando el breve lapso entre el despido del denunciante y la creación del sindicato, tal como consta de las fechas establecidas en la sentencia impugnada.

Evidenciándose de esta forma que la jueza aplicó correctamente la ley a los hechos que fueron fijados de manera inamovible para esta Corte, por lo que el presente recurso no podrá prosperar.

Décimo: Que en cuanto a la vulneración del artículo 174 en relación al 221 ambos del Código del Trabajo, conforme a los hechos que se probaron en juicio y que son inalterables para esta Corte, la sentenciadora estableció que no existió práctica antisindical y que el fuero del que goza el actor le es inoponible a la demandada, y en nada altera la decisión de término de los servicios.

En efecto, la sentenciadora, luego de establecer que el empleador no tenía conocimiento del fuero, dio por acreditado que: *“la constitución del Sindicato y su elección tiene como origen el dejar sin efecto el despido del que había sido comunicado, esta juez no puede dejar de señalar que en autos nos encontramos con lo que doctrinariamente se ha llamado; “sindicato del día después”, es decir, un trabajador que tomando conocimiento del término de su relación laboral con el empleador, en este caso, por necesidades de la empresa, decide constituir un sindicato, con el solo objeto de beneficiarse del fuero que se establece para quienes concurren a su formación, circunstancias que*



a todas luces permite además concluir que no solo no nos encontramos frente a una práctica sindical sino además el fuero del que goza el actor le es inoponible a la demandada, y por tanto en nada altera la decisión de término de los servicios, pues este no existía al momento en la fecha de término de los servicios”.

Por consiguiente, conforme a los hechos acreditados y al serle inoponible el fuero del actor a su empleador, en nada altera la decisión de término de los servicios de éste, por lo que no existe infracción de las normas indicadas como vulneradas, máxime si, en este caso, se acreditó que la constitución del sindicato al que accedió el actor tuvo por finalidad el proveerse de una inamovilidad para evitar el despido del que ya estaba en conocimiento desde el 17 de octubre de 2021, siendo elegido presidente del sindicato, el 29 de noviembre de 2021. Por lo que se debe rechazar este capítulo del recurso.

Undécimo: Que, además de lo antes dicho, cabe indicar que el recurrente no cuestionó la decisión de la jueza de establecer la inoponibilidad del fuero al empleador, lo cual implica que el artículo 174 en relación al 221, ambos del Código del Trabajo, no tienen aplicación en este caso, porque para ello debían alterarse no solo los hechos, sino que, además, impugnar la decisión de inoponibilidad.

II.- En cuanto al recurso de la demandada Consorcio Acciona Ossa Pizarotti CC110 SpA:

Duodécimo: Que la demandada deduce su recurso fundado en primer lugar en la causal del artículo 478 letra e), la que interpone en dos hipótesis: a) en cuanto la sentencia se extiende a puntos no sometidos a decisión del tribunal, y; b) en relación al artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, es decir, la falta en la sentencia del análisis de toda la prueba rendida.

a) En cuanto al primer extremo de la causal, es decir, haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos a decisión del tribunal, señala que en el considerando vigésimo segundo se aprecia el yerro, puesto que en caso alguno ha solicitado declarar la nulidad o ineficacia del acto electoral que habría constituido al actor en el Presidente del Sindicato Interempresa.



Aduce que la demanda reconvencional es clara en cuanto a que se pide que se declare la inoponibilidad del acto electoral, que en los hechos produce los mismos efectos de la nulidad, pero deja a salvo la existencia de la organización sindical, y así se señalaría en el petitorio de la reconvencional. Así, la sentencia se habría abocado a conocer una acción no deducida -la de nulidad del acto- por ser propia de la justicia electoral, y ello le impidió fallar la acción que sí se interpuso, y llevó a desestimar la demanda interpuesta por la demandada.

b) En cuanto a la falta del requisito del análisis de toda la prueba rendida, señala que existe una absoluta omisión del análisis del material probatorio disponible, el que no se analiza ni siquiera superficialmente, sin considerar que al ser una práctica antisindical está amparada por la prueba indiciaria.

Señala que con el correo electrónico acompañado, se acredita que el día 17 de octubre el actor ya sabía de su desvinculación y declaró no haber visto el correo, a pesar de reconocer la casilla como propia y muchos otros correos recibidos, no siendo justificada la omisión. Además, el documento donde supuestamente se solicitaría ministro de fe para constituir el sindicato no cuenta con cargo de recepción, y solo cuenta con él el documento recibido el día 21 de octubre, cuando ya conocía el demandante su despido.

Agrega que no existe prueba alguna de la realización de una actividad sindical por parte del Sindicato Interempresa y que respecto de la demandada no presentó contrato colectivo, o descuento de cuotas sindicales, a pesar de encontrar su supuesta base de afiliados en la gran minería del cobre, tampoco se acreditó una nómina de socios, por lo que estamos frente a un sindicato del día después, y en consecuencia ante una práctica antisindical.

Arguye que las organizaciones sindicales no pueden actuar con mala fe y abuso de derecho, pues el único objetivo del demandado reconvencional fue constituir un sindicato para beneficiarse del fuero y gozar de sus privilegios. Por ello, expresa, la prueba destinada a desestimar la denuncia entablada en lo principal, es prueba indiciaria de la práctica antisindical del demandante.



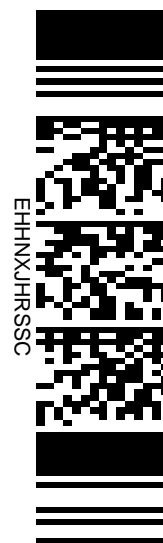
Décimo tercero: Que en cuanto a la extrapetita, el vicio que indica la recurrente como fundamento no dice relación con haberse extendido el juez a cuestiones que no fueron sometidas a su decisión en la demanda reconvencional, desde que, como por ejemplo, no se ha fallado un acción o excepción distinta a la hecha valer por las partes, ni se ha alterado la causa o cosa de pedir.

En efecto, de la lectura de la demanda reconvencional, se advierte que las peticiones formuladas al tribunal son: a) declarar que el denunciado y demandado reconvencional ha incurrido en la práctica antisindical denunciada, del artículo 290, letra f) del Código del Trabajo; b) Ordenar su cese inmediato, declarando que el sr. Edward Gallardo Basay carece del fuero de los artículos 221 y 243 del Código del Trabajo; c) En subsidio de lo anterior, declarar que la elección del demandado reconvencional como dirigente sindical, le es inoponible a su representada; d) Aplicar la máxima sanción establecida en el artículo 292 del Código del Trabajo, de 300 Unidades Tributarias Mensuales.

Conforme a tal petitorio, la jueza en el motivo vigésimo segundo sostuvo que: *“En lo relativo a la demanda reconvencional, atendido el mérito de lo antes resuelto, estima esta juez no concurren los presupuestos para declarar la nulidad o ineficacia del acto electoral, como ya se señaló. Por otro lado y en cuanto a la práctica antisindical de parte del trabajador que se denuncia. Teniendo en cuenta, que la norma del artículo 290 letra f) del Código del Trabajo, exige mala fe o abuso del derecho, lo cual sin perjuicio de lo resuelto, no ha sido probado por la demandada, se procederá al rechazo de la demanda reconvencional planteada por la parte demandada”*.

Es decir, la sentenciadora se pronunció rechazando la demanda reconvencional, estimando que no se probó la práctica antisindical imputada al actor y, si bien se refiere a la nulidad o ineficacia del acto electoral en el motivo vigésimo segundo, lo cierto es que, en el considerando vigésimo, párrafo segundo, la jueza expresamente declaró que *“el fuero del que goza el actor le es inoponible a la demandada”*.

Es decir, tal declaración judicial de inoponibilidad –que no ha sido impugnada-, que se encuentra contenida en la sentencia en alzada, permite que el acto de constitución del sindicato se conserve, por ser un



acto real, no simulado, y que en sí no tiene defectos o imperfecciones, salvo la finalidad perseguida por el actor, por ello, sus efectos respecto de la elección del trabajador como Presidente, no pueden hacerse valer respecto de las personas perjudicadas por tal acto –empleador-, precisamente por la inoponibilidad que fue declarada por la sentenciadora.

Establecido lo anterior, existan o no las omisiones denunciadas por el recurrente, lo cierto es que no tiene ninguna influencia en lo dispositivo del fallo. Lo anterior es relevante desde que la ley exige la existencia de un perjuicio para que sea procedente, y por ello se usa la expresión “sustancialmente” o “influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

En consecuencia, el principio de trascendencia es el elemento básico en esta clase de impugnación. Lo antes señalado se corrobora con lo dispuesto en el artículo 478 inciso penúltimo del Código del Trabajo que dispone que “No producirán nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo...”.

De todo lo dicho, solo cabe concluir que no existe ninguno de los vicios denunciados por esta causal.

Décimo cuarto: Que conforme al libelo de impugnación, los reproches del recurrente se refieren a la falta de valoración de toda la prueba rendida, haciendo referencia solo a dos en particular, que es un correo electrónico acompañado y un documento respecto de la solicitud notarial de constitución de sindicato y, en cuanto a la trascendencia de tales medios probatorios, refiere que su omisión llevó a rechazar la demanda reconvencional deducida por su parte, en circunstancias que ésta debió ser acogida, lo cual hace procedente la invalidación del fallo, dictando “(...) *sentencia de remplazo que conforme a derecho y a la prueba rendida y hechos acreditados, acoja la demanda reconvencional interpuesta por mi parte en mérito de lo expuesto en esta presentación con costas*”.

Lo anterior es relevante desde que la ley exige la existencia de un perjuicio para que sea procedente, y por ello se usa la expresión “sustancialmente” o “influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, lo que implica que la omisión denunciada ha de tener un alcance o



importancia decisiva, en términos que el razonamiento probatorio ausente o equivocado debe ser capaz de cambiar la decisión adoptada por la jueza, lo que no se vislumbra en esta causa.

Décimo quinto: Que en efecto, conforme a la lectura del fallo en alzada, se puede concluir inequívocamente que la jueza ponderó la prueba que el recurrente estima omitida, ya que en el motivo décimo tercero, analiza expresamente el documento N° 9 de dicha parte, esto es, el correo electrónico remitido al actor el 17 de octubre de 2021, antecedente que, junto a otros, le permitieron establecer como hecho que la comunicación de despido del actor fue el 17 de octubre de 2021, para hacerse efectiva el 28 de octubre de 2021.

Luego, en el considerando vigésimo primero, la sentenciadora se pronuncia sobre el otro documento que estima omitido, indicando que en nada modifica lo resuelto –que no existe práctica antisindical de la empresa- todos los documentos referidos a los intentos previos de constitución de Sindicato, por cuanto, no existe indicio alguno que la demandada hubiere tenido algún conocimiento de ellos, máxime si tampoco tienen validez para constituir un fuero.

Por lo antes dicho, se advierte que no existe el vicio denunciado, sino que, por el contrario, lo que en realidad se objeta por el recurrente es que la prueba que indica omitida no habría sido valorada de la forma que dicha parte pretendía, lo que es propio de otra causal de invalidación. Por lo que este recurso no puede prosperar.

Décimo sexto: Que, en subsidio deduce la causal del artículo 478 letra c) del Código, es decir, cuando sea necesario alterar la calificación jurídica de los hechos asentados por el tribunal de base sin modificar los señalados por el tribunal de base.

Indica que en el considerando vigésimo del fallo se acreditó que la demandada no tenía conocimiento de la calidad de aforado del actor al momento de despedirlo, que no existe práctica antisindical pues no existiría ánimo vulneratorio de la libertad sindical, que nos encontramos ante lo que la doctrina ha llamado un “sindicato del día después” y que no se demuestra un despido antisindical por parte del Consorcio. Sin embargo, no se da lugar a la práctica antisindical denunciada por la demanda reconvencional, aun cuando se demostró el evidente abuso



del derecho, sin intención alguna de realizar actividades sindicales, todo lo que debió llevar a acogerse la demanda reconvencional.

Décimo séptimo: Que como se ha sostenido ya por esta Corte, la causal establecida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo requiere el mantenimiento de las circunstancias de hecho asentadas en el mismo fallo, tanto por la naturaleza de las causales, tanto porque su propio texto así lo consigna. Por ende, lo que se persigue es modificar la calificación jurídica que ha efectuado el sentenciador de los hechos establecidos en el fallo, sin alterar las conclusiones fácticas del mismo.

Ahora bien, en uno de sus extremos, la causal del artículo 478, letra c) del Código del Trabajo, apunta a definir la naturaleza jurídica de los hechos probados en el juicio, lo cual implica que el juez debe determinar la norma legal que sea pertinente al caso en concreto -conforme a los hechos asentados e inamovibles para esta Corte-, dentro de aquellas que el ordenamiento jurídico establece para resolver el conflicto.

Décimo octavo: Que tal como se indicó, en el motivo vigésimo la sentenciadora, respecto de la demanda principal, estableció que no existió práctica antisindical en contra del actor, siendo el argumento central el desconocimiento de la empresa al momento del despido de la calidad de aforado del trabajador, y que no se advierte el ánimo vulneratorio de la libertad o la acción sindical, al existir al momento del despido desconocimiento de dicha calidad. Luego, indicó, a mayor abundamiento, que la constitución del Sindicato y su elección tiene como origen el dejar sin efecto el despido del que había sido comunicado, lo cual conlleva a que el fuero del que goza el actor le es inoponible a la demandada.

Respecto de la demanda reconvencional, en el considerado vigésimo segundo de la sentencia, y considerando lo antes dicho, la jueza dio por establecido que: *“Teniendo en cuenta, que la norma del artículo 290 letra f) del Código del Trabajo, exige mala fe o abuso del derecho, lo cual sin perjuicio de lo resuelto, no ha sido probado por la demandada, se procederá al rechazo de la demanda reconvencional planteada por la parte demandada”*.



Es decir, los hechos acreditados –reseñados en el motivo octavo de esta sentencia–, permitieron a la sentenciadora llegar a la conclusión que no existió practica antisindical del trabajador, considerando que no se acreditó mala fe o abuso del derecho de parte de éste.

Por ende, si bien se acreditó que la constitución del sindicato y su elección tuvo como origen el dejar sin efecto el despido del actor del que ya se encontraba en conocimiento, ese solo hecho no permite ser calificado como una práctica antisindical del trabajador, en los términos del artículo 292 letra f) del Código Laboral, desde que dicha figura requiere que los fueros se ejerzan de mala fe o con abuso del derecho y sucede que, en este caso, no se advierte la concurrencia de dichos elementos.

En consecuencia, la sentenciadora no incurrió en el yerro en que se funda esta causal, desde que no efectuó una errada calificación jurídica de la cuestión sometida a su conocimiento, máxime si el recurso solo se sustenta en los mismos hechos de la demanda principal, los que considera “*indicios*” suficientes, alegación que no configura una calificación jurídica, sino que se trata más bien de meros reproches respecto del razonamiento y conclusiones de la jueza.

En efecto, el recurso se ha construido cuestionando los hechos asentados en el fallo impugnado y que son inamovibles para esta Corte. Por lo que este motivo de nulidad deberá ser rechazado.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechazan** los recursos de nulidad interpuestos por la parte demandante y la demandada principal, en contra de la sentencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT S-9-2022, fallo que, en consecuencia, **no es nulo**.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra (S) doña Erika Villegas Pavlich.

No firma la Ministra (s) señora Villegas, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones de suplencia en esta Corte.

Laboral-Cobranza N° 1075-2023.





EHNHXJHRSSC

Pronunciado por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Carolina S. Brengi Z., Alejandro Aguilar B. Santiago, dos de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dos de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

